

La colaboración eficaz como valor probatorio en el Proceso Penal Peruano

Effective collaboration as evidential value in the Peruvian Criminal Process

Alberto Rojas Alvarado¹

RESUMEN

La figura de la colaboración eficaz viene produciendo buenos resultados frente a la lucha contra crimen organizado en nuestro país y diferentes partes del mundo desde los últimos años, en el Perú ha servido mucho frente a la lucha contra el terrorismo, los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 90, y lo sigue haciendo ahora en la actualidad contra la corrupción de altos funcionarios públicos, que forman parte en su mayoría de veces a organizaciones criminales, es un intercambio de información relevante por un acto de felonía, por una mejora en la pena merecida legalmente.

La información la proporciona una persona que ha cometido un delito muy grave, generalmente propio de la criminalidad organizada y los beneficios en cuanto a la pena los otorga el Estado, asimismo, se abordaron y analizaron los aspectos normativos, constitucionales y de política criminal en el marco del derecho penal premial, que permite la correcta y legítima aplicación del proceso por colaboración eficaz; atendiendo a su naturaleza, e implicancia.

Palabras claves: colaboración eficaz, crimen organizado, aspectos normativos, corrupción

ABSTRACT

The figure of effective collaboration has been producing good results in the fight against organized crime in our country and different parts of the world in recent years, in Peru it has served a lot in the fight against terrorism, acts of corruption and violations of human rights that occurred during the 90s, and continues to do so now against the corruption of high public officials, who are mostly part of criminal organizations, is an exchange of relevant information for an act of felony, for a improvement in the legally deserved penalty.

The information is provided by a person who has committed a very serious crime, generally characteristic of organized crime and the benefits in terms of punishment are granted by the State, likewise, the regulatory, constitutional and criminal policy aspects were addressed and analyzed in the framework of award-winning criminal law, which allows the correct and legitimate application of the process by effective collaboration; attending to its nature, and implication.

Key words: effective collaboration, organized crime, regulatory aspects, corruption

INTRODUCCIÓN

Algunos conceptos y aspectos implicados en el contexto procesal penal, así como las últimas leyes del instituto procesal de la colaboración que sale a la luz y es de relevancia social y jurídica debido al incremento del flagelo de la corrupción en todos sus niveles.

Nadie puede negar que en la actualidad en los países desarrollados como los de en vía de desarrollo las organizaciones criminales están en aumento, en este artículo se ha tratado de ser lo más didáctico posible y actualizado y está orientado no solo a la comunidad universitaria sino al público en general, teniendo como uno de sus propósitos su divulgación.

La institución jurídica "colaboración eficaz", ha venido siendo instrumentalizada, además de los casos de crimen organizado, en los casos de corrupción de funcionarios, lavado

de activos, entre otros, considerados "emblemáticos" en el último quinquenio en Latinoamérica y principalmente en el Perú. Se ha procurado emplear un discurso orientado a la aprehensión de los conocimientos aquí expuestos.

Sin lugar a dudas, el trabajo minucioso acerca del discurrir del flagelo de este milenio, la corrupción, se ha valido de un análisis profundo en el que participan tanto actores como procesos que revisten la importancia de este enfoque.

En un estado como el nuestro, en el que se nota casi una corrupción institucionalizada, existen personajes que se resisten a contribuir con investigaciones que detendrían el avance de la corrupción; pues, se convierten inclusive en bandas organizadas para tapar los indicios de estos actos anómalos, que, a manera de mafias norteamericana adquieren una jerarquía al estilo de Chicago de la época de Al Capone, con la diferencia que no se recurre al asesinato, pero sí al chantaje y la amenaza.

Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Recibido:13/12/2021 - Aprobado:30/12/2021

¹Maestro en Derecho Civil de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y de la Universidad Nacional de Barranca. Director del Estudio Rojas Alvarado & Abogados. ORCID: [0000-0002-6822-8402](https://orcid.org/0000-0002-6822-8402) Albertorojas123@hotmail.com

Es en este terreno en el que se ha legislado en favor de una norma que permita conocer los vericuetos del acto inmoral de la corrupción para disgregar a cada elemento que de manera organizada se constituye como toda una maquinaria que impide llegar a conocerla verdad, en la que se colude el tráfico de influencias, el lavado de activos y la asociación ilícita para delinquir, de manera que, cuando se encuentra un indicio como la parte inicial del madejo de una situación desligada con lo legal, entra a tallar esta norma favorable en la investigación en su etapa procesal como es la colaboración eficaz.

Con este instrumento, se puede desmadejar todo el enmarañado de la organización, lo que hace que los autores tratarían de impedir que se sepa la verdad, por lo que el Ministerio Público va a considerar evaluar al candidato de la colaboración eficaz, siendo parte del delito grave cometido, entrega la información pertinente para saber toda la verdad, recibiendo a cambio un beneficio en su pena, cuya figura está establecida en los artículos 472 a 481 del Código Procesal Penal en la parte del Proceso por Colaboración Eficaz.

A nivel internacional, la Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia internacional o "Convención de Palermo", inserta en su artículo 26 las "medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley". Es en este horizonte internacional que el estado peruano adopta medidas que promuevan que personas involucradas en hechos delictivos brinden información fundamental sobre hechos bajo investigación.

Demás está decir que el carácter recíproco de la colaboración, los estados deben conceder beneficios para quienes brinden esta información en el contexto del proceso penal del que son parte. En el Perú, primero se implementó la Ley 25384 (constituido de un único artículo y fue dado el 30 de diciembre de 1991), que proporcionaba beneficios a personas ligadas a ciertos delitos a cambio de información eficaz de estos y de sus actores. Posteriormente, el Decreto Ley 25582 (constituida de 4 artículos que se dio el 24 de junio de 1992, durante el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Fujimori) también asignaba beneficios a quien proporcione información veraz, oportuna y significativa sobre hechos punibles en contra del Estado. Posteriormente, la Ley 27378 del 20 de diciembre del 2000 estableció beneficios por colaboración eficaz en el caso de la criminalidad organizada. Esta ley se dio en el contexto de los procesos seguidos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; luego que se derogara dicha ley por la Ley 30077 del 19 de agosto del 2013: "Ley contra el Crimen Organizado" como una figura del derecho penal, incorporándose al Código Procesal Penal, entrando en vigencia el 01 de junio de 2014.

La figura de la colaboración eficaz viene produciendo buenos resultados en algunos casos emblemáticos, frente a la lucha contra crimen organizado en nuestro país y diferentes partes del mundo desde los últimos años, en el Perú ha servido mucho frente a la lucha contra el terrorismo, los actos de corrupción y violaciones de derechos humanos ocurridos durante los 90, y lo sigue haciendo ahora en la actualidad contra la corrupción de altos funcionarios públicos, que forman parte en su mayoría de veces a organizaciones criminales, es un intercambio de información relevante por un acto de felonía, por una mejora en

la pena merecida legalmente.

La información la proporciona una persona que ha cometido un delito muy grave, generalmente propio de la criminalidad organizada y los beneficios en cuanto a la pena los otorga el Estado, asimismo, se abordaron y analizaron los aspectos normativos, constitucionales y de política criminal en el marco del derecho penal premial, que permite la correcta y legítima aplicación del proceso por colaboración eficaz; atendiendo a su naturaleza, e implicancia.

El propósito, es fomentar el debate académico, de motivación para la investigación de institutos jurídicos procesales, y como consecuencia ello, de evitar, mitigar, de manera eficaz la continuidad y aumento de los delitos de corrupción de funcionarios, organizaciones criminales entre otros.

Uno de los flagelos que están destruyendo la tierra, en su expresión más extensa es el resultado de muchos males que estamos padeciendo hoy en día, con temas e incidencias cada vez en aumento, como la corrupción de altos funcionarios públicos, que forman parte en su mayoría de veces de organizaciones criminales, actos que no solo antiéticos, sino hechos ilícitos y que alcanzan todos los estatus sociales y que está haciendo estragos en todas sus formas en nuestro país y a nivel mundial.

El instituto de colaboración eficaz supone el beneficio de ambas partes, aunque a veces podríamos estar ante la figura de la impunidad, porque puede eximir o rebajar condenas, sin embargo se puede considerar a que si no fuera así, habría no solo una difícil persecución a integrantes de organizaciones criminales, sino que además, no habría información importante para el esclarecimiento de los hechos, pero es necesario mencionar que el colaborador en su momento formó parte de la estructura criminal, y, por ende, debe de ser sancionado de conformidad con el daño cometido.

Con respecto al testimonio como medio de prueba; Dentro de cualquier proceso es importante y relevante las pruebas y son estas las que van a dar convicción al órgano jurisdiccional, quien determinará, el grado de culpabilidad.

A través de los últimos años, para enfrentar estos flagelos ha sido necesario, fortalecer la lucha contra la corrupción, la delincuencia y crimen organizado y, en atención a que aparecen casos emblemáticos a nivel nacional e internacional, la falta de valoración de las declaraciones de quienes se someten a la colaboración eficaz y las ambigüedades del procedimiento, algunos de los artículos de la sección VI de los procesos por colaboración eficaz artículos 472 al 481 de nuestro Nuevo Código Procesal Penal han sido modificados en estos últimos años.

En el año 2017, el instituto de la colaboración eficaz empieza a tratarse y a estudiarse con mayor énfasis debido a que el Decreto Legislativo N° 1301 modificó artículos del Nuevo Código Procesal Penal, después el Reglamento del proceso especial de colaboración eficaz en el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS publicado en el diario oficial el peruano con fecha jueves 30 de marzo, caracteriza este instituto, como un proceso especial autónomo, no contradictorio que se rige por el principio del consenso entre las partes y la justicia penal premial y negociada, señala que independientemente se forme

un cuaderno fiscal y expediente judicial autónomo, a fin de luchar contra el crimen organizado.

Fases del proceso de colaboración eficaz:

Las fases son las siguientes:

- a) Calificación,
- b) Corroboración,
- c) Celebración del acuerdo,
- d) Acuerdo de beneficios y colaboración,
- e) Control y decisión jurisdiccional y
- f) Revocación.

Inicio del proceso de colaboración eficaz. - el proceso por colaboración eficaz puede ser solicitado de manera oral o escrita por el colaborador o promovido, de oficio, por el fiscal, Así mismo la Policía Nacional podrá captar a la persona que considere susceptible de brindar información y llevarlo inmediatamente ante el fiscal para que éste evalúe si es viable promover la colaboración eficaz.

Contenido de la disposición fiscal. - Una vez realizada la calificación, el fiscal inicia el proceso especial, de manera reservada, mediante una disposición que debe contener:

Los supuestos de procedencia,

- a) Que no existan impedimentos legales,
- b) Si el aporte ofrecido podría ser eficaz,
- c) Si la información corroborada y
- d) Si permitirá alcanzar alguno de los supuestos del artículo 475 del Código Procesal Penal.

Asimismo, también dispondrá sobre las diligencias a realizarse y requerirá las medidas limitativas de derecho que sean pertinentes.

Suscripción de acuerdo preliminar. - El fiscal y el colaborador podrán suscribir un acuerdo preliminar donde se expondrá los hechos objetos de delación, cargos y procesos objeto de colaboración, la voluntad del colaborador, forma de entrega de la información, actos de corroboración y las obligaciones del colaborador

Acta de beneficios y colaboración eficaz. - Una vez culminada la negociación entre el fiscal, el colaborador y su defensor, se procederá a suscribir el acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. Para ello se requiere que:

- a) La decisión deba ser el resultado de reuniones del fiscal con el colaborador.
- b) Los hechos objeto de delación hayan sido corroborados total o parcialmente, y
- c) El beneficio sea proporcional con la utilidad de la información aportada.

Fines de la audiencia. - Se establece que la audiencia sea privada, a la cual concurrirá el fiscal, el colaborador y su abogado defensor. También puede asistir el agraviado pero su incomparecencia no impedirá la realización de ésta.

La audiencia tiene la finalidad de:

- a) Precisar y ratificar el contenido del acta de beneficios y colaboración eficaz,
- b) Escuchar la motivación del acuerdo,
- c) Escuchar al colaborador eficaz, y
- d) Verificar la legalidad y proporcionalidad del acuerdo.

Labor del juez penal, se establece que será el juez penal quien se encargará de verificar que se hayan cumplido los presupuestos del proceso especial. Igualmente, será quien apruebe o desapruebe el acuerdo. Si lo desaprueba emitirá un auto, y si lo aprueba dictará una sentencia, si el beneficio otorgado es de exención o remisión de la pena, en la sentencia el Juez Penal Competente ordenará la inmediata libertad del colaborador eficaz y la anulación de sus antecedentes.

Exclusión del colaborador eficaz de los procesos objeto del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz

Emitida la sentencia de colaboración eficaz, el Fiscal, conforme a las circunstancias del caso concreto, decidirá la forma idónea de excluir al colaborador eficaz de los procesos objeto del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz.

Si los procesos objeto de acuerdo se encuentran en investigación preparatoria, al concluir la misma, el Fiscal podrá requerir el sobreseimiento respecto del colaborador eficaz.

Si los procesos objeto de acuerdo se encuentran en etapa intermedia, el Fiscal podrá coordinar con el defensor del colaborador para que solicite el sobreseimiento de oficio, notificándole al Juez de la Investigación Preparatoria el contenido de la sentencia de colaboración eficaz.

Si los procesos objeto de acuerdo se encuentran en juzgamiento, el Fiscal podrá retirar la acusación, notificándole al Juez competente el contenido de la sentencia de colaboración eficaz.

Si los procesos objeto de acuerdo se encuentran en apelación o ejecución, el Fiscal deberá comunicar al órgano judicial competente el contenido de la sentencia de colaboración eficaz.

En todos los casos, en los procesos derivados o conexos objeto del acuerdo, no quedará constancia que la exclusión del colaborador del mismo, es a consecuencia de la aplicación del proceso por colaboración eficaz.

En la historia del Perú, el colaborador eficaz en nuestro ordenamiento no fueron objetos de regulación en el código de enjuiciamientos del código penal de 1863; tampoco en el código de procedimientos de materia criminal de 1920.

-Ley 24651 – 1987 modificó el artículo 85-a del C.P. de 1924 Literal C

-Ley 25103 – 1989

-Ley 25384 (Artículo Único) 30-12-1991 Gob. Emergencia y Reconstrucción Nacional

-Decreto Ley 25582 (cuatro artículos) 24-06-1992

-Decreto Ley 25499 – 1992 (estos 3 últimos otorgaban beneficios por información veraz, oportuna y significativa)

-Decreto Legislativo 748 – noviembre de 1993.

-Decreto Legislativo N° 901 – 30-05-98

-Decreto Legislativo N° 902 – 30-05-98

-Ley 27378 – 20-12-2000 ámbito de criminalidad organizada, procesos seguidos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

- Decreto Legislativo 987
- Ley 29824 del 03-01-2012
- Decreto Legislativo 925 (10-02-2013)
- Ley 30077 del 19-08-2013 Ley contra el crimen organizado
- Decreto Legislativo 1301 del 30-12-2016
- Ley 30737 del 13 de marzo 2018.

La institución de la colaboración eficaz empezó hace aproximadamente 35 años, fue la ley 24651 del 06 de marzo de 1987, con los procesos de los delitos de terrorismo, y en su artículo 2 incorporó el artículo 85-A del CP de 1924.

El mencionado instituto señalaba dos beneficios y eran la excepción de la pena y el beneficio de la remisión de pena, la primera consistía en que una persona involucrada o no en acto de terrorismo proporcionaba información eficaz respecto a los actos de terrorismo y de su organización y la segunda consistía en que el sentenciado por el delito de terrorismo proporcionaba información eficaz sobre la organización y actos de terrorismo.

Entonces la información tenía que tener eficacia y veracidad tanto en la excepción de la pena como en la remisión de la pena y tenía como representante del Ministerio Público en que ambos casos tenían que ordenar e intervenir en la manifestación disponiendo la correspondiente declaración judicial del agente y la verificación de la información.

Cuando era verificada por lo tanto comprobada la idoneidad de la información se procedía de la siguiente manera:

En los casos de la exención de la pena se daban dos casos:

a) Si no había un proceso penal en curso el fiscal provincial solicitaba la declaración simultáneamente con la denuncia que corría traslado al Señor Juez.

b) Si había un proceso penal de por medio el Juez solicitaba informe del resultado de las investigaciones policiales y formaba, un cuaderno incidental, y posteriormente era elevado al presidente de la Corte Superior.

c) En el caso de la remisión de la pena, el Fiscal luego de agotar las investigaciones del caso, remitía copia de lo actuado a la sala superior que dictó la condena.

El 30 de diciembre de 1991 se dio la Ley 25384, que otorgaba beneficios a personas vinculadas con ciertos delitos a cambio de información eficaz de estos y de sus autores, después se da el Decreto Ley 25582 del 24 de junio de 1992, en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que otorgaba beneficios a quien proporcione información veraz, oportuna, y significativa sobre hechos punibles en agravio del Estado. Asimismo, la Ley 27378 del 20 de diciembre del 2000, estableció beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Ley que tuvo influencia en los procesos seguidos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Posteriormente la Ley 30077 del 19 de agosto del 2013, "Ley contra el Crimen Organizado", esta figura del derecho penal premial fue incorporada al Código Procesal Penal y entró en vigencia el 1 de julio de 2014.

La colaboración eficaz en el proceso penal peruano se reduce

a la médula del expediente y su finalidad, y es de su importancia basada en la declaración del postulante a colaborador eficaz, quien, de forma coherente, certeza y claridad se hace acreedor de un beneficio procesal, de una parte, interesada, quien será el arrepentido beneficiado, con un fiscal que actúa sin control contradictorio que concluirá con una acusación.

Brittar, W (2001). Cardozo, I (2001). De Martino, P (2001) Sobre Delacao premiada no Brazil a na Italia y sobre pruebas judiciales señalan "La prueba que puede trasladarse es solo la admitida y actuada judicialmente, es decir, en un proceso, no en un procedimiento y ante los tribunales competentes para su valoración. Se trata, pues, solo de pruebas, no de actos de investigación. Y prueba admitida solo puede ser la prueba, no los actos de investigación. La admisión de la prueba es un acto procesal muy determinado y regulado y la norma se refiere expresamente a este acto no a otros.

En estas condiciones previas, únicamente puede ser trasladada aquella prueba cuya obtención sea imposible o difícil en el proceso receptor o cuya reproducción sea igualmente compleja.

Adicionalmente, es necesario que se presente un riesgo cierto de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba".

Respecto a la protección legal que se le da al colaborador eficaz en el Perú llamado en algunos casos delator más que arrepentido es la persona que se aparta de la organización criminal y colabora con la justicia, declarando y señalando la existencia del delito aclara las actividades dentro de la organización no solo la del él sino la de los demás comprometidos; sin embargo, también es crítica esta institución, es decir, en la declaración del colaborador, porque se evidencia la ausencia de contradicción, además de su reserva absoluta lo que los entendidos señalan como como una característica propia del procedimiento por colaboración eficaz apareciendo de acuerdo a la doctrina el testigo anónimo.

La participación de este instituto procesal de la colaboración eficaz se ve reflejada en los procesos penales en los delitos de terrorismo, así tenemos que éstas tenían ciertas características:

Herrera, M (2014), San Martín, C (2014) *Un análisis comparado y Derecho procesal penal: La negociación en el nuevo proceso penal* "a) cuando alguien involucrado en delito de terrorismo esté o no incurso en el proceso penal o en una investigación policial, proporcione información eficaz que permita revelar detalles de organizaciones terroristas y su funcionamiento, la identificación de los cabecillas y/o de sus principales integrantes, así como futuras acciones que con dicha información se impidan o se neutralicen".

En el artículo 2 se establecía el procedimiento de verificación de la información aportada por el colaborador a cargo del fiscal. Esta forma de colaboración y su verificación fueron reproducidas por el Decreto Ley N° 25499 del 12 de mayo de 1992, en sus artículos 1 y 2. Posteriormente el 20 de abril de 1996 se publicó el Decreto Legislativo N° 815 Ley de exclusión o reeducación de pena,

denuncias y recompensas en los casos de delitos e infracción tributaria, en cuyo artículo 2 se establecieron los beneficios de reeducación de pena para los autores y exención de pena a los partícipes que proporcionaran información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito tributario. Los requisitos y verificación de la información proporcionada se regularon en los artículos 6 y 8 del citado decreto legislativo.

Un antecedente relevante fue el Decreto Legislativo N° 824 Ley de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, publicado el 24 de abril de 1996, que con la finalidad de desestructurar las organizaciones dedicadas al narcotráfico estableció en su artículo 19 los beneficios de exención de pena para los agentes que se encuentre o no sometidas a investigación o proceso por Tráfico Ilícito de Drogas y la remisión de pena para los condenados por dicho delito cuando proporcionen información oportuna y veraz que permitan identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas en el ámbito nacional e internacional o a las actividades del tráfico ilegal de armas o lavado de dinero, vinculados con el Tráfico Ilícito de Drogas.

En el artículo 22 se precisó que la veracidad y eficacia de la información proporcionada debía ser constatada obligatoriamente con presencia del fiscal.

Fue el 21 de diciembre del 2000 que se dictó la primera regulación de carácter general sobre la colaboración eficaz. La ley N° 27378 que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, que se aplicaba a distintos tipos de delitos perpetrados por una pluralidad de personas o por integrantes de organizaciones criminales de delitos de corrupción de funcionarios, de peligro común, contra la administración pública, contra la humanidad, contra el estado y la defensa nacional, terrorismos y delitos aduaneros.

El Código Procesal Penal de 2004 en su texto regulo el proceso de colaboración eficaz en los artículos 742 a 481 aplicable a una variedad de delitos como:

- a) La asociación ilícita, terrorismos, lavado de activos, delitos informáticos contra la humanidad,
- b) Secuestro agravado, robo agravado, abigeato agravado, así como delitos monetarios y tráfico ilícito de drogas, siempre que en todos estos casos el agente actúe en calidad de una organización delictiva. Ámbito que fue modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30077 “
- c) Para todos los casos de criminalidad organizada.
- d) Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, tributarios, aduaneros, contra la fe pública y contra el orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en concierto por una pluralidad de personas”. Los cabecillas no podían acogerse a estos beneficios premiales.

Finalmente, las normas del código procesal penal están referidas a la información brindada por el colaborador eficaz y su importancia de éstas, éstas se aplicarán a solo algunos delitos donde existan la pluralidad de personas”.

El beneficio procesal de la colaboración eficaz como institución basada en el premio procesal llamada también justicia penal

negociada, va más allá de la confesión sincera, debido a que no solo beneficia al colaborador sino tiene un alcance de justicia social y por ello el llamado Derecho premial, es apoyado por varios países, en que se ven envueltos en una gran red de corrupción y en las altas esferas de la administración pública.

En 1764 Cessare Beccaria, considerado el padre del derecho penal y sus obras asombran a los letrados de aquel entonces, y tuvo influencia en los nuevos códigos criminales de principios del siglo XIX, en su obra monumental *Dei delitti e delle pene*, nos hablaba entre otros institutos del derecho penal sobre las penas y premio de la siguiente manera: «Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto observo al presente en las leyes de todas las naciones un silencio universal.

Si los premios propuestos por las Academias a los descubridores de las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por qué los premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y fructífera en las manos del sabio”.

Beccaria, C (1991). *De los delitos y las penas*: El autor, expresa en relación a la a figura del arrepentido o colaborador “Ciertos tribunales ofrecen la impunidad al cómplice de grave delito que evidencie a sus compañeros. Tal recurso tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Los inconvenientes son que la nación autoriza la traición detestable aun entre criminales; porque son menos fatales para una nación los delitos de valor que los de vileza; porque el valor no es frecuente; porque no espera más que una fuerza benéfica y directora que lo haga contribuir al bien público; y la vileza, en cambio, es más común y contagiosa, y cada vez se concentra más en sí misma. Jiménez de Asúa estima necesario que toda recompensa sea objeto de un juicio contradictorio para «prevenir la prodigalidad y los otros abusos, por los cuales el valor de las recompensas se degrada».

García-Mercadal, F (2010) y García Loygorri, (2010). *Penas, distinciones y recompensas: nuevas reflexiones en torno al derecho premial*: El origen del llamado Derecho Penal Premial puede remontarse al ordenamiento romano, en el que encontramos interesantes referencias al comienzo del Digesto —el mayor thesaurus jurídico de la Historia— que se inicia con el título I del libro I que lleva por rúbrica «Sobre la Justicia y el Derecho».

El fragmento que abre dicho título se debe a Ulpiano: «El Derecho es la técnica de lo bueno y lo justo. En razón de lo cual se puede llamar a los juristas, junto con los médicos, sacerdotes; en efecto, rinden teórico culto a la justicia y profesan el saber de lo bueno y de lo justo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo lícito de lo ilícito, anhelando hacer buenos a los hombres, no sólo por el temor de los castigos, sino también por el estímulo de los premios».

Goldsworthy, A (2005). *El Ejército romano*: Una referencia más concreta se encuentra en la Lex Cornelia de sicariis et veneficiis, a propósito de los delitos de lesa majestad. Por lo demás, las victorias militares articularon un acabado sistema

de recompensas (donas) para cuantos habían contribuido a ellas, que podían ser económicas, jurídicas –v.g. la concesión de la ciudadanía–, o puramente honoríficas, como las coronas y trofeos o las pequeñas medallas en forma de disco (phalerae) que los combatientes exhibían sobre sus cotas de malla o corazas.

Von Ihering, R (1884) *Der Zweck im Recht, I, Breitkopf und Hartel, Leipzig* En Roma, como afirmaba el insigne jurista alemán Rudolf von Ihering (1818-1892), «al Derecho penal correspondía un Derecho premial. Hoy esta noción nos es extraña».

El instituto de la colaboración eficaz nace según los estudios con Jeremy Bentham quien reconoció como necesaria las recompensas a favor de las denuncias de la comisión de delitos y por la delación de todos los implicados por ello es muy conocido su frase de Jeremy Bentham, de que era preferible la impunidad de uno de los cómplices que la de todos, sin embargo, reconocía que esta propuesta traía consigo, peligro, ya que, al ser un beneficio procesal conocido por los criminales, sus actos ilícitos quedarían impunes y hasta además premiados procesalmente.

De acuerdo a los antecedentes de los sistemas jurídicos contemporáneos teneos al derecho anglosajón, existió el testigo de la corona, que imperó a través de la *king's evidence* (Inglaterra) o *State's witness* (EE. UU).

La colaboración eficaz se caracteriza por ser una institución que se basa en la en la confesión veraz del colaborador, sino que además tiene que señalar los hechos e implicancias de los implicados con los hechos, pero además colaborar con la individualización de los responsables y del nivel de responsabilidad de cada uno de ellos los implicados y así empezar a ejercitar la persecución penal por parte del Ministerio Público.

El Derecho Penal Romano es uno de los sistemas mejor pensados y aplicados alguna vez en la historia, ya que ha sido una pauta para que diversas naciones lo tomen como ejemplo para crear sus propias edificaciones penales.

Este Derecho fue el resultado de una continua evolución que atravesó las tres formas de gobierno imperantes en Roma: la Monarquía, la República y el Imperio. No obstante, la creatividad de los romanos, en estos períodos no se dio una forma de negociación propia en el ámbito punitivo, que tuviera génesis en sus formas de resolución de los conflictos, ya que acató el sistema compositivo heredado de la época primitiva.

Como se ha dicho anteriormente, hubo ciertos sistemas que se aplicaron a lo largo de la antigüedad y Roma no fue la excepción, ya que en sus orígenes (Monarquía) existió la venganza privada, donde la comunidad tenía el Derecho de hacer Justicia por sus propias manos, aun cuando esto generara una guerra con otra persona o familia. Además, se implementó la Ley del Talión, siendo la pena o la venganza igual de fuerte a la ofensa cometida.

Por estos dos factores de venganza y de discusión continua que se vivía en la sociedad romana, fue que se implementó el

sistema compositivo, donde se daba una negociación entre el ofendido y el ofensor en el que se fijaba un precio monetario a la ofensa realizada, con el fin de impedir el ejercicio de la venganza privada a la que tenía Derecho cualquier persona de la colectividad (Navas, 1998). Bajo esta figura, el agresor además de pagar una suma al ofendido, también debía dar cierta cantidad de dinero a la autoridad pública, para que el ofensor recuperara la protección jurídica que le brindaban. Cabe aclarar que este sistema durante la época de la Monarquía era de carácter voluntario, pero en la República con la creación de las XII tablas se convirtió en un sistema obligatorio con el fin de minimizar las disputas (Velázquez, 15 2010).

Es aquí donde empieza a aparecer la eficacia de la administración de Justicia pretoriana como criterio relevante para considerar el tema de las negociaciones y así evitar congestionar el trabajo de los Magistrados.

La figura de la negociación en el Derecho Romano, únicamente procedía cuando los hechos que generaban la ofensa eran leves, es decir, contra particulares ya que aquellos dirigidos en contra de las Instituciones o las autoridades romanas, eran castigados con la pena de muerte o el exilio Como puede advertirse, dentro del Derecho Procesal Penal Romano la única forma de negociación legalmente reconocida y permitida era el sistema compositivo ya que, en este régimen jurídico, las declaraciones de culpabilidad no tenían ningún efecto ni beneficio para el acusado. A nivel internacional, tenemos como fuente importante la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, o “Convención de Palermo”, cuenta con el artículo 26 denominado “medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.

Por lo tanto, es importante su cumplimiento por parte del estado peruano debiendo aplicarlas dentro de su política criminal del país, debiendo el estado conceder beneficios para quienes informen sobre su participación y de los involucrados en la organización criminal.

En Ecuador como en otros países del mundo la figura de la cooperación eficaz tiene como principal objetivo político el de combatir el crimen, siendo esta acción la principal tarea del Ministerio Público, institución encargada de cumplir con la seguridad política y ciudadana del país.

En Chile existe la Ley N° 24424 tipificada como Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, la cual introdujo la institución de cooperación eficaz conocida como la figura del arrepentido, con el objetivo de obtener una colaboración que permita adquirir pruebas contundentes y veraces en aras de lograr la captura total de los líderes criminales, cuyo objetivo podría ser imposible para la justicia si utilizara otra técnica de investigación (Congreso Nacional, 2010). En Chile la norma se percibe que la cooperación eficaz está constituida como una técnica especial de investigación eficiente con objetivos políticos criminales cuya finalidad principal es obtener instrumentos eficientes para la aprensión de criminales y sus organizaciones operacionales, así como evitar la ocurrencia de más acciones delictivas. Así mismo, el beneficio de la

colaboración eficaz tiene como compensación para el procesado aminorar un por ciento de la pena.

En Colombia la institución de la cooperación eficaz está estipulada en el Decreto Legislativo No. 2790/90 caracterizado como Estatuto para la Defensa de la Justicia. Este Decreto en su Art. 63 establece que al procesado que se acoja a la cooperación eficaz y que su información sea corroborada positivamente se le rebajará hasta las tres cuartas partes de la condena y en casos excepcionales se les absolverá de la sanción, esta exención aplica para aquellos actores, copartícipes o encubridores de delitos vinculados al tráfico de sustancia estupefacientes, secuestro o extorsión, y que en su condición de acusados hayan decidido colaborar de forma eficaz con la justicia, identificando a otros o en su defecto haya proporcionado información relevante para la erradicación total de la organización delictiva. (Estatuto para la Defensa de la Justicia, 1990).

En Argentina los delitos en que se utiliza la técnica del arrepentido como instrumento de pruebas son los referentes a terrorismo, tráfico de personas, secuestro, drogas y tráfico de armas, se utiliza más en los delitos de narcotráfico, asociación ilícita y corrupción y solo cuando la información proporcionase datos exactos y verdaderos de los líderes de 42 las organizaciones se obtendrán beneficios en la condena e incluso la exoneración de la misma. Esta figura se ve regulada por el Código Penal 2015 de la República de Argentina en su Art. 29 y al igual que en las normas penales de otros países es utilizada en el intercambio de información relevante y destacada que facilite llegar al fondo y conclusión de la investigación en la captura de los líderes criminales y a cambio de la misma se les reduce la condena a los procesados. A continuación, se hará una descripción de los modelos de Justicia transaccional más importantes en el Derecho comparado, tomando como modelos a Estados Unidos, Alemania e Italia.

En Estados Unidos a lo largo del siglo XX, en el proceso penal norteamericano, se ha venido desarrollando un tipo de acuerdo o negociación libre y espontánea, entre el Ministerio Público (ente acusador) y el acusado conocido con el nombre de plea bargaining.

Concepto Según Alschuler (1978) el plea bargaining es “la práctica que consiste en la obtención por el acusado de una serie de concesiones oficiales a cambio de declararse culpable” (p. 15) 20 Alberto Bovino (2001) dice que “existe plea bargaining cuando un fiscal induce a una persona acusada penalmente a confesar su culpabilidad y a renunciar a su derecho a un juicio, a cambio de una sanción penal más benigna de la que le sería impuesta si se declarara culpable luego de un juicio” (p.3). El plea bargaining “hace referencia a una institución jurídico procesal, en donde el acusado se declara culpable en busca de un tratamiento menos severo por parte del órgano jurisdiccional. Normalmente se llegará por medio de un acuerdo entre la acusación y la defensa” (Rodríguez, 1997, p.34). Para Grover Cornejo (citado por Garzón, 2007) el plea bargaining: “Es un mecanismo en el cual, el procesado puede negociar con el agraviado y con el Estado, con quienes está involucrado en el proceso respecto de sus imputaciones penales y su responsabilidad. Es una

forma especial del procedimiento criminal donde el denunciado pide al juez una reducción de la sanción, la que sería impuesta de otra manera por el hecho delictuoso. El requisito previo para la súplica que estipula, es por una admisión de la culpabilidad implícita del acusado y el acuerdo entre el denunciado y agraviado en la opción de este procedimiento especial”. (p. 130) Cooper (citado por Rodríguez, 1997), dice que el plea bargaining es “una institución consistente en un give and take en donde el acusado cuando se declara culpable está esperando recibir un tratamiento menos severo (lenient traitmen) por parte del órgano jurisdiccional”. (Rodríguez, 1997, p. 35).

El plea bargaining es entonces, un instrumento procesal por medio del cual se logran diversos objetivos al interior de un proceso penal: para el acusado, quien por medio de una negociación con la Fiscalía busca disminuir en la mayor cantidad posible, la pena que probablemente le impondrá el Juez. Esta negociación se concreta por medio de la aceptación de la culpabilidad sobre los hechos demandados por el Ministerio Fiscal, lo que implica la renuncia del acusado a ciertos Derechos Constitucionales. De esta manera se materializa un segundo objetivo que beneficia a la Fiscalía, representante del Estado persecutor, en tanto que el proceso finaliza de inmediato y no hay necesidad En Alemania, el proceso penal alemán se divide en dos fases: la declarativa y la de ejecución. La primera consta de tres etapas: la averiguación o procedimiento preparatorio, fase intermedia y el procedimiento principal (Garzón, 2007). La fase de averiguación, se inicia ya sea, mediante el descubrimiento oficial por parte de la policía o los Fiscales, por denuncia o por solicitud de persecución penal. Igualmente, existen dos formas para dar por terminado el proceso: la primera es por archivo de la causa y la segunda es por el ejercicio de la acción penal (Garzón, 2007). En Alemania, la instrucción del proceso penal es función del Ministerio Fiscal, con lo cual se derogaron las normas que atribuían la competencia al Juez Instructor (Gómez, s.f.). En esa medida, la Fiscalía ordena a la Policía que investigue los hechos aparentemente delictivos (S 163StPO), conforme a sus técnicas propias, siendo en la práctica la Policía la verdadera instructora de las causas criminales. Luego sigue la fase intermedia, en la que se hace un estudio por parte del Estado, a fin de saber si existen pruebas que den una sospecha suficiente para imputar el hecho punible al acusado. En caso afirmativo se dicta la resolución sobre la apertura del procedimiento principal, además “se facilita la preparación del juicio oral dando a las partes la última posibilidad de evitar su desarrollo, acortándose en consecuencia el proceso”. (Garzón, 2007, p.141).

En el procedimiento principal, se llega al juicio siendo éste oral, público y contradictorio. Este juicio se da por terminado con el pronunciamiento de la sentencia. De esta manera se llega a la última fase denominada decisoria. No obstante, la existencia de los procesos ordinarios para encausar una investigación penal, existe la posibilidad de terminar de manera anticipada el conflicto, a través de acuerdos informales o el llamado Absprache que se asimila al plea bargaining de Estados Unidos. Estos acuerdos se basan en la confianza que tiene el acusado, cuando hace una confesión esperando recibir por parte del Tribunal un beneficio (Garzón, 2007). “Esta práctica

ha sido admitida por el Tribunal Constitucional Federal en virtud a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 de la ley fundamental de la República Federal de Alemania y al principio del Estado de Derecho, siempre que de ese modo no sean menoscabados los principios de investigación, de culpabilidad, de igualdad y la libertad de la voluntad de decisión” (Garzón 2007, p. 145).

Las partes intervinientes dentro de este proceso de negociación son la Fiscalía y el acusado, pero a diferencia del plea bargaining de Estados Unidos, en esta negociación sí interviene el Juez; lo cual ha sido ampliamente criticado, pues se ha dicho que tal actuación altera su imparcialidad.

Clases de Absprache Existen dos tipos de negociaciones dentro del Derecho Procesal Penal Alemán: el primero se realiza con base en los parámetros estipulados en la Ley penal alemana y el segundo, se hace de manera pragmática, es decir, se basa en el honor, la promesa de confianza, la seriedad del declarante y el acuerdo.

En Italia según Frisancho, A, Manuel (2019), señala que el primer país europeo que legislo y aplico esta nueva institución fue Italia, de allí que su legislación procesal viene a ser la fuente de la figura del arrepentimiento y la colaboración eficaz para los demás países del viejo continente y de Latinoamérica.

Patteggiamento En Italia se introdujeron los procedimientos simplificados y alternativos al procedimiento ordinario por la distorsión entre el cumplimiento absoluto del principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal y la carencia de recursos para hacerlo operativo. De esta manera, se buscó el logro al interior del proceso penal, de los principios de eficacia y garantía.

Así lo afirma Rodríguez (1997): “El sistema judicial italiano carecía de capacidad para desarrollar todos los procedimientos penales que tenían que iniciarse al recibir noticias de 38 comisión de hechos relevantes penalmente; los miembros del Ministerio Público no pueden llevar a cabo todas las investigaciones preliminares que serían necesarias a esas noticias recibidas”. (p. 130). En el procedimiento penal italiano el Ministerio Fiscal es dueño de la pretensión punitiva y se encuentra regido por el principio de legalidad, es decir, por la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal, razón por la que, no puede disponer de la misma a su arbitrio. Por su parte, se encuentra el Juez, quien tiene por objeto lograr la verdad verdadera o histórica, y por este motivo tiene facultades probatorias de oficio. Este reconocimiento a la labor judicial, hace que el operador jurídico se inmiscuya en todas las actividades de las partes, tanto en los procedimientos ordinarios, como en los abreviados. En este sentido, “la jurisdicción funge como freno de la acción de la Fiscalía para hacer respetar los derechos y garantías del imputado” (Guerrero, 2006, p.10)

En este sistema, donde la “legalidad” es venerada, por ser de tradición continental, se quiso contemplar figuras que evitaran tanto desgaste para la administración de Justicia, y en las actas preparatorias del nuevo Código de Procedimiento Penal quedó contemplada la necesidad de importar el modelo del plea bargaining de Estados Unidos. Solución que no tuvo muy buena acogida porque se dijo que “son abismales las diferencias de costumbres y tradiciones que separan al sistema

judicial italiano de los sistemas del common law”, (Rodríguez, 1997, p. 133) y esto es así, porque mientras en el proceso italiano, rige el extremo principio de legalidad, en el Derecho Anglosajón no.

A diferencia del proceso estadounidense, en Italia existe un fuerte control judicial del consenso. Al respecto, Guerrero indica que en el proceso penal italiano: “el acuerdo se somete al juez, quien tiene la facultad de aceptar o rechazar la solicitud ejerciendo un control relativo a la calificación jurídica del hecho, la valoración de las circunstancias y la voluntariedad de sometimiento del imputado el juez tiene la obligación de valorar la congruencia de la sanción señalada por las partes, rechazando los eventos hipotéticos que resulten desventajosos para el sometido y disponiendo que el procedimiento continúe por sus cauces ordinarios”. (2006, p. 1066)

MATERIALES Y MÉTODO

Los materiales utilizados son las casaciones de nuestra Corte Suprema de Justicia y el método utilizado es descriptivo y hermenéutico, por ejemplo y si bien es cierto que en las casaciones del 2012 y 2018, se resolvieron bajo el amparo de la ley Casación N° 2350-2012-LIMA (Cáceres, 2015) Vale la pena destacar un caso en el que la presunta víctima no es la mujer. En la Casación N° 2350-2012-LIMA publicada en el diario oficial el 28 de febrero de 2014, quedó en evidencia cómo se puede forzar al sistema para establecer un maltrato psicológico que no se basaba en pruebas fundamentales como, precisamente, la pericia psicológica. Con fecha 13 de junio de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió el recurso de don César Alberto Ninanya Gonzales contra el fallo expedido por la Segunda

En el Primer Acuerdo Plenario de la Sala Penal Nacional N° 02-2017-SPN, se desarrolló el tema de la utilización de la declaración del colaborador eficaz en un proceso judicial, como que la información proporcionada proviene de un delincuente que es parte de una organización criminal, el representante del ministerio público está obligado a realizar un exhaustivo filtro necesario, y de acuerdo a ello realizar el acuerdo de beneficios y colaboración, y está a la vez, sometida a la decisión jurisdiccional, en él se estudia la decisión de si a esa declaración del colaborador eficaz se le va a dar un valor judicial en las medidas limitativas de derecho o medidas coercitivas y también si en las solas declaraciones de los colaboradores, se puede garantizar una debida sentencia condenatoria.

El [Acuerdo Plenario](#) precisa que, en los requerimientos de prisión preventiva, se puede tener en cuenta los elementos de convicción recabados en las diligencias de corroboración en los procesos derivados o conexos al proceso especial de colaboración eficaz, siempre que estén acompañados de otros elementos de convicción, a fin de tener mayor información de cargo, eso sí, sometidos al contradictorio en la audiencia respectiva para disponer la limitación de la libertad locomotora, pues su valoración requiere una sospecha grave. La declaración del colaborador eficaz, debe tener mayores controles, toda vez que éste siempre busca un beneficio en la pena, por lo que no es admisible una corroboración del

colaborador eficaz con otro colaborador o aspirante, porque la lógica es que tiene escasa credibilidad.

Campos, Edhin (2018). En *Pasión por el Derecho*: En ese orden, la declaración del colaborador eficaz puede ser valorada, ya sea en razón de los elementos de convicción actuados en el proceso de colaboración eficaz, como en función de actos de investigación externos, sean estos obtenidos con posterioridad o que preexistan a la postulación del proceso especial, según las circunstancias de cada caso en particular.

RESULTADOS

Entonces podríamos señalar que la colaboración eficaz es el trato el acuerdo que hace el Estado representado por el ministerio público para poder acceder a información eficaz y veraz y acto sea corroborado por parte de uno o varios integrantes de una organización criminal quienes voluntariamente confiesan haber cometido uno o varios delitos, a cambio de un premio procesal y de condena, debido a que por estos actos el colaborador es premiado, gozando de la atenuante de la misma acción.

Para que tenga la eficacia la institución de la colaboración eficaz tiene que respetar los principios constitucionales, es decir, el principio de legalidad procesal, también tiene un carácter de un instituto jurídico que utiliza la política criminal de un país y que lo desarrolla dentro de un estado de Derecho, y se considera un beneficio a cambio de que colaboren con la administración de justicia.

El instituto de la colaboración eficaz tiene que ver con la información que el colaborador ha realizado, pero además los que han participado en el delito, es decir, las personas involucradas en el hecho ilícito dentro de una organización criminal, haciendo hincapié que no se trata de encontrar un atenuante respecto al arrepentimiento del sujeto que colabora. La colaboración necesita requiere esclarecimiento de los hechos por ello es importante la participación de los sujetos procesales como los testigos los peritos, la policía los jueces y los fiscales, todos con una misma dirección en la búsqueda de la justicia.

Según Castillo A, José L, (2018). La doctrina distingue entre la colaboración procesal y la colaboración con la justicia. En la colaboración procesal el interesado no se limita a admitir la propia responsabilidad, sino que actúa dentro de la investigación o el proceso para evitar o atenuar la consecuencia dañosa (o peligrosa) del delito, objeto del proceso en curso, o para impedir la comisión de un delito conexo (artículo 475.1, a). Cfr. Amarelli, Giuseppe (1991). por su parte, en la colaboración con la justicia el imputado proporciona a los investigadores todo su bagaje de conocimiento sobre la forma que se cometió el delito o la dinámica del grupo criminal, independiente de lo que sea objeto del proceso criminal en curso

Las normas penales de carácter premial son compatibles con la prevención del delito una vez que se han realizado comportamientos positivos de desistimiento, arrepentimiento o conductas posteriores a la consumación del delito. El llamado derecho penal premial y su relación con la colaboración eficaz tiene relevancia jurídica en nuestros días,

y en nuestro país, si bien es cierto que la colaboración eficaz no es el único instituto considerado premial, ya es conocido que la tendencia del derecho procesal penal tiende al aumento de las penas, es decir penas más gravosas, como parte de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, por ello nace la colaboración eficaz para que el sujeto procesal, autor o partícipe de un hecho delictivo, atenúe su condición y con un beneficio premial, siempre y cuando asuma no solo su responsabilidad, sino tener la idoneidad en la certeza y veracidad del objeto del hecho ilícito, pero además, dar información sobre sujetos que participaron y participan en la organización criminal.

El objeto y eficacia de la colaboración eficaz en la fuente de la legislación peruana se encuentra influenciado con las normas del derecho comparado, y para tal es importante que en ellas se dan y deben ser importantes en su eficacia, en primer lugar esclarecer mediante evidencias la consumación del delito, sus agentes implicados en el hecho, como las circunstancias en las que se desarrolló, en segundo lugar individualizar a los presuntos involucrados en el delito consumado o a los integrantes de la organización criminal, en tercer lugar, es mitigar los efectos negativos del crimen organizado y cuarto decomisar los bienes delictivos, conocer de los de donde provienen, el lavado de dinero, entonces el instituto de la colaboración eficaz busca sancionar identificar los integrantes del crimen organizado y por ende de la secuelas que estás puedan originar a la sociedad.

Concluye, Guzmán, J (2012) y Herrera, M (2012) *del premio de la felonía en la historia jurídica y el derecho penal contemporáneo en revista de derecho penal y criminología, y La negociación en el nuevo proceso penal, un análisis comparado*:

De los requisitos más importantes de la institución jurídica de la colaboración eficaz es que la información de datos, hechos o pruebas tiene que ser clara fehaciente y corroborada para que sea eficaz, evidenciándose la comisión de un delito, la individualización del delincuente y su relación con el crimen organizado, lo que se evidenciara con los siguientes pasos.

1.La información debe ser *objetiva* en el sentido, que debe describir de la manera más fiel y fidedigna la realidad, la forma como han ocurrido los hechos o de modo o grado de intervención de los sujetos en el hecho.

2.La información debe, además, ser *útil y relevante*; La utilidad de la información está en función a la idoneidad objetiva que aquella presta para las tareas de pruebas del delito o de la responsabilidad penal de las personas involucradas.

3.La información que brinda el colaborador debe ser *circunstanciada, precisa y detallada*. Para que una declaración pueda ser evaluada jurídicamente y racionalmente es necesaria que ofrezca referencias precisas y autosuficientes de hechos, personas, lugares y fechas.

4.Una vez recibida la información esta debe ser *corroborada*. Dicha información no debe ser enjuiciada por sí misma, o de manera abstracta, ni tiene sentido por lo que se afirme o niegue.

5. La información debe ser *veraz*. No basta con informar o comunicar la existencia de hechos, circunstancias, datos o pruebas. Es necesario que estas sean verdaderas y hallan ocurrido en realidad”.

DISCUSIÓN

El resultado de la observación de los hechos nos permitió obtener características peculiares de los datos obtenidos, los que se ven expresados contextualmente en la presente discusión de resultados, sobre el particular:

Uno de los aspectos relevantes es si ley actual, sobre colaboración eficaz constituye una garantía procesal y si además cumple los objetivos del derecho penal, ya que para algunos crea un verdadero acto de impunidad gracias a la felonía de un delincuente, de acuerdo a las encuestas, se advierte que no existe un consenso mayoritario para sostener que esta ley garantiza un instrumento de desarticulación de organizaciones criminales.

Finalmente, en cuanto a la consideración de un grupo de juristas, señalan que estas si son eficaces en la lucha contra organizaciones criminales. La colaboración eficaz plantea retos en su aplicación, entendiéndose esta como instrumento de la política criminal estatal para luchar contra la impunidad. Asimismo, en razón de los beneficios que otorga, que se entiende son proporcionales a la información recibida, su valoración probatoria debería tener una especial consideración, siempre que la misma haya sido debidamente corroborada, pero teniendo claro que no debe ser tomada como la única prueba a efectos de determinar la responsabilidad penal.

El proceso de colaboración eficaz cuenta con una serie de etapas. Este ocurre de forma independiente a un proceso común. Es decir, no es un incidente del proceso común. Es por ello que el Acuerdo de Beneficios y colaboración resultante es oponible a todos los procesos que este detalla. El expediente se alimenta por actas que acreditan las diligencias de este proceso. Las etapas de la colaboración son las siguientes:

Primera fase:

La solicitud para colaborador eficaz puede ser escrita o verbal, esta última sujeta a condiciones. Al recibir la solicitud, el fiscal analiza la aptitud del colaborador y la idoneidad de su información. Si desea, puede reunirse con él. Cabe precisar que el fiscal a cargo es quien, en ese momento, dirige la investigación preparatoria; si está en juicio oral, será el fiscal de la causa.

Fase de corroboración:

Inicia al admitirse la solicitud de colaboración. Se realizan diligencias de corroboración para determinar la eficacia de la información. Se puede hacer con ayuda de la policía. Esta etapa no supone la paralización de la investigación en curso. Además, se podrá firmar un Acuerdo Preparatorio -según cada caso en particular- donde están los beneficios, obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su corroboración. Asimismo, se pueden dictar medidas de protección para el colaborador, para garantizar su presencia en la investigación.

Acuerdo de Beneficios y Colaboración:

Luego de las diligencias, el fiscal decide si otorga o no los beneficios. Puede desestimarlos, si no ha corroborado la información en sus aspectos fundamentales. Si lo otorga, debe constar en el acta (i) el beneficio acordado; los hechos a los cuales se refiere el beneficiario; y, (iii) las obligaciones del beneficiario. San Martín (2015), en su obra de Derecho Procesal Penal, señala que hay 6 cláusulas que debe tener el acuerdo que pueden ser la identificación del abogado, de su colaborador, los cargos, el reconocimiento de estos, entre otros.

Fase de control judicial:

El juez puede formular observaciones sobre el acuerdo. Es así que puede ordenar devolver lo actuado al fiscal. Luego, con el acta original y complementaria, el juez, dentro del 10mo día, celebra una audiencia privada donde: (i) precisa y ratifica el contenido del acta; (ii) expone los motivos del acuerdo, así como interroga al reo; y, (iii) formula el alegato final. Al tercer día, el juez debe dictar una sentencia, que puede ser impugnada, cuyo conocimiento será de la Sala Superior. El agraviado podrá impugnar la sentencia aprobatoria en la parte de la reparación civil, si expresó voluntad de intervenir en el proceso y sea parte. Cuando se deniegue la colaboración, las declaraciones expuestas por el colaborador son como inexistentes y no podrán utilizadas en su contra

Fase de revocación:

El fiscal podrá solicitar la revocación de los beneficios previa indagación y adecuada motivación. Esta puede ser en el sentido de que el beneficiario ha incumplido las obligaciones a las que estaba sometido. La decide el juez que otorgó el beneficio. La audiencia se realiza a pesar de que el beneficiado no asista. Pero este tiene la posibilidad de apelar. Por último, los efectos de la revocación están en función al beneficio que se revoca.

Valor probatorio de la declaración del colaborador En función del grado de información recibida

Al momento de recibir el beneficio premial, se debe evaluar de forma casuística la relevancia de la información. Cabe precisar que no toda información será útil para esclarecer los hechos bajo investigación, por eso se realizan las diligencias de corroboración. Asimismo, algo importante para señalar es que la información recibida no es garantía de una condena futura. La declaración del colaborador per se no puede ser la única prueba para acreditar responsabilidad penal. Si bien es un elemento relevante, debe ser evaluado como una prueba más en el proceso, pero atendiendo a su singularidad como prueba. Es importante señalar que no se pide que el colaborador acredite los hechos más allá de una duda razonable, sino que muestre datos relevantes que permitan esclarecer el hecho delictivo. Finalmente, no se debe asumir la declaración de un aspirante a colaborador sea tomada como si fuera cierta, más aún si no se han llevado a cabo las diligencias necesarias para verificar su veracidad.

En función del beneficio otorgado

Un beneficio otorgado debe ser visto en dos perspectivas. Una,

como el premio efectivo que es para quien colabora con información. Otra, como un instrumento de política criminal al servicio de la lucha contra la impunidad. Es así que, si se otorga un beneficio, se entiende que la información recibida -y debidamente corroborada- no solo sirve para avanzar en la investigación fiscal o proceso judicial, sino debe ser una prueba de relevancia superior con relación a los otros medios de prueba. Con ello no se quiere decir que la declaración del colaborador sea la prueba determinante o la única a valorarse, sino una que debe tener una consideración especial, teniendo en cuenta los beneficios que se han dado para su obtención como prueba. El beneficio otorgado, si es ventajoso para el colaborador, debe revertir en beneficio del esclarecimiento de los hechos.

Es por eso que se postula que la valoración en sí del aporte del colaborador -cuando ya cuente tal calidad- debe tener una especial consideración sobre las otras pruebas.

La colaboración eficaz plantea retos en su aplicación, entendiéndose esta como instrumento de la política criminal estatal para luchar contra la impunidad. Asimismo, en razón de los beneficios que otorga, que se entiende son proporcionales a la información recibida, su valoración probatoria debería tener una especial consideración, siempre que la misma haya sido debidamente corroborada, pero teniendo claro que no debe ser tomada como la única prueba a efectos de determinar la responsabilidad penal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADRIAN GOLDSWORTHY, El Ejército romano, Madrid, Akal, 2005, pp. 96-97.
- BRITTAR, WALTER BARBOSA; Delacao premiada no Brasil a na Italia: uma Analicé comparativa Cardozo Isaza, Jorge: Pruebas judiciales, Bogota; Ediciones Librería del Profesional; 4ed DE MARTINO, PAOLO; La collaborazione fattiva dell Informatore di pólice spazzi per un premio ex art 58, Donini, Massimo; Un Derecho Penal fundado en la Carta Constitucional; razones y límites, La experiencia Italiana Penal. Madrid julio – 2001; N°8, Borbio Norberto, La función Promocional del derecho, en; Contribucion a la teoría del Derecho. Madrid, 1990.
- CASTILLO A, JOSE L. (2018), La colaboración eficaz en el derecho peruano Ideas solución, editorial p.357.
- CESARE BECCARIA, De los delitos y de las penas, edic. Juan Antonio Delval, Madrid, 1991, p. 83.
- DE LA JARA, E. (2016). La colaboración eficaz contra el crimen organizado, entre lo permitido y prohibido por el derecho. Balance de su aplicación en casos del Destacamento militar Colina (Tesis de maestría). PUCP, Lima, pág. 78 y 94.
- EDHÍN CAMPOS BARRANZUELA Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional. 1/7/2018 Ip. Pasión por el Derecho.
- ERNESTO DE LA JARA BASOMBRÍO, director fundador del Instituto de Defensa Legal, especialista en temas de justicia y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y Rodrigo Sánchez Ríos, abogado penalista peruano, nacionalizado brasileño, con estudio de abogados en Curitiba, catedrático en la PUCP/PR-Brasil, que ha llevado la defensa de Marcelo Odebrecht, describen, comparan y analizan los beneficios del régimen de la colaboración eficaz en Perú y Brasil. (IDL-Reporteros/Enfoque Derecho) Publicado el sábado 17 de febrero, 2018.
- FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Penas, distinciones y recompensas: nuevas reflexiones en torno al derecho premial.
- FRISANCHO A, MANUEL. (2019); el procedimiento especial de colaboración eficaz-DE JUS Ediciones, Lima.
- GUZMÁN, D., JOSÉ, L. (2012). “del premio de la felonía en la historia jurídica y el derecho penal contemporáneo en revista de derecho penal y criminología, Madrid.
- GUZMÁN DALBORA, JOSÉ LUIS “del premio de la felonía en la historia jurídica y el derecho penal contemporáneo en revista de derecho penal y criminología, Madrid (enero 2012), Herrera Guerrero, Mercedes; La negociación en el nuevo proceso penal, un análisis comparado p.189.
- HERRERA GUERRERO, MERCEDES: La negociación en el nuevo proceso penal. Un análisis comparado, Lima; palestra 2014, San Martin Castro, Cesar; derecho procesal penal. Lecciones, lima, Neyra Flores, José Antonio; tratado de derecho procesal penal, Lima Idemsa 2014.
- HERRERA, M (2014), SAN MARTIN, C (2014) *Un análisis comparado y Derecho procesal penal: La negociación en el nuevo proceso penal. Lima.*
- PERU21. (2 de febrero de 2017) ¿Cuál es la diferencia entre la colaboración eficaz y la confesión sincera? <https://peru21.pe/politica/diferencia-colaboracion-eficaz-confesion-sincera-65688>.
- SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 871,875,876,880. BIBLIOGRAFÍAS WEB
- RAMOS, E. (31 de agosto de 2018) Colaboración eficaz: ¿En qué consiste y quiénes pueden acogerse? <https://andina.pe/AGENCIA/noticia-colaboracion-eficaz-que-consiste-y-quienes-pueden-acogerse-723723.aspx>
- RUDOLF VON IHERING, Der Zweck im Recht, I, Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1884, p. 182
- TREJO, H., AMANDA, L. (2014); la Incidencia del colaborador eficaz en el proceso penal y su funcionalidad con los casos relacionados con el crimen organizado; tesis, Guatemala.